**VIGILANCIA Y CONTROL DE LEGALIDAD
DE LOS TRIBUNALES ECLESIASTICOS
POR EL TRIBUNAL SUPREMO
DE LA SIGNATURA APOSTOLICA
(DESDE EL CODIGO DE 1917 A LA
CONSTITUCION APOSTOLICA «PASTOR BONUS»)**

CARMELO DE DIEGO-LORA

I. LA VIGILANCIA SOBRE LA RECTA ADMINISTRACION DE LA
JUSTICIA EN LA IGLESIA ANTES DEL CODIGO DE 1983

La Constitución Apostólica *Regimini Ecclesiae Universae* de 15 de Agosto de 1967 (AAS 59 [1967] pp. 885-928), introdujo en su art. 105 un precepto de atribución de concreta competencia al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, que desde luego no se hallaba en ninguno de los cc. 1602-1605 del Código de Derecho Canónico de 1917, a la sazón vigente. Este precepto fue el siguiente: *ad normam sacrorum canonum invigilat pro munere suo rectae administrationi iustitiae.*

Pudiera ser que tal vigilancia tuviera que ver con esa también competencia nueva que se le atribuía, siguiendo la relación del propio art. 105 de REU, consistente en *tribunalium regionalium vel interregionalium erectionem curat*. Sería ésta una vigilancia que podrá ejercerse en el momento aquel de la erección de posibles tribunales regionales e interregionales, en cuya actividad el Tribunal de la Signatura Apostólica habría de poner, mediante su *Sectio prima*, el cuidado necesario para acertar sobre, al menos, la necesidad u oportunidad de erigir esos tribunales supra-diocesanos.

También se halla en esta misma línea la competencia asignada para resolver las cuestiones de competencia planteadas entre tribunales de justicia en la Iglesia que no tuvieran entre sí un tribunal superior (cfr. cc. 1603 §1, 6º y 1612 § 2). Determinar la competencia cuando esta es discutida no deja de significar también una eficaz aportación a la rectitud con que la Justicia deba ser administrada. En esta misma línea, si bien limitada su competencia a la *altera Sectio*, se encontraba la competencia que atribuye el art. 107 de la Constitución REU, para resolver, en el ámbito administrativo, los conflictos de competencia que surjan entre Dicasterios de la Sede Apostólica. Aunque la actividad de estos Dicasterios no pueda calificarse propiamente hablando de actividad de la administración de justicia, no cabe dudar de que todos los órganos de gobierno de la Iglesia buscan un resultado de justicia en sus actividades; resolver los conflictos que entre ellos se planteen, con indicación del Dicasterio competente en el caso concreto, significa velar por la rectitud de los actos de la Administración de la Iglesia; y en cuanto éstos procuran también la justicia, se ejerce la misión de velar, a un mismo tiempo, por un obrar recto que ha de repercutir en la rectitud con que el órgano se enfrenta a su propia tarea justa de gobierno.

La vigilancia sobre la recta administración de Justicia puede también pensarse que sería ejercitada cuando el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica llegara a conocer de cualquiera de los recursos enumerados en el c. 1603 antiguo, cuya competencia absoluta le permitía juzgar de las decisiones del propio Tribunal de la Rota Romana, que se estimara infringían en sus sentencias exigencias formales que originaran nulidades; o que habían sido dictadas en cuanto al fondo con manifiesta o evidente injusticia basada en algunos de los supuestos del c. 1905, entonces vigente para la *restitutio in integrum*.

Al cuidar, mediante la *querela nullitatis*, de la observancia de la ley procesal, en relación a exigencias que se consideraban fundamentales para que la justicia fuera rectamente administrada, se estaba efectivamente, por su propio deber del oficio judicial *-pro munere suo-*, utilizando medios jurídicos eficaces para procurar que la obra de la justicia en la Iglesia fuera rectamente cumplida. Desde este punto de vista, mediante el control de la observancia de formas obligadas, no se alcanzaba a discernir del acierto de las sentencias canónicas, de su feliz respuesta a los *dubia* formulados, pero se ofrecía la garantía de que la conducta judicial, tal

como se podía advertir de la sentencia misma, se ajustaba a unas exigencias formales necesarias, que posibilitaban la pacífica afirmación de que tal conducta judicial fue al menos recta.

Desde la óptica del recurso *restitutionis in integrum* aun se llegaba más allá, pues con él se trataba de evitar que una sentencia firme y definitiva se consolidara para siempre y *erga omnes*, consolidándose a un mismo tiempo la injusticia evidente de una sentencia canónica inapelable. El juicio rescisorio que habría de emitirse en este recurso, calificado, en el Código de 1917, de extraordinario, supondría ejercicio efectivo de la recta administración de justicia en la Iglesia: esta rectitud resultaría vulnerada si, para obtener sentencia favorable, se utilizó la falsedad documental; o sólo se sirvió de una prueba manifiestamente incompleta con la que se decidiera la cuestión planteada, cuando documentos dados a conocer posteriormente exigirían perentoriamente una decisión contraria a la ya pronunciada; o cuando se obtuvo la sentencia con dolo de una parte y en daño de la otra; o porque se infringió evidentemente las prescripciones de la Ley.

Si la cuidadosa erección de Tribunales regionales e interregionales proporcionaba ya esa vigilancia anticipada de la recta administración de justicia en la Iglesia, la *querela nullitatis* y la *restitutio in integrum* vinieron a significar a su vez un ejercicio de control *a posteriori* sobre esa administración de justicia propia del Sagrado Tribunal de la Rota Romana, dejando sin efecto las sentencias que se llegaran a estimar que no fueron pronunciadas con aquellas condiciones requeridas para una administración de justicia que se desarrollara rectamente.

1. *La vigilancia sobre las decisiones judiciales*

Esas actividades judiciales del Tribunal de la Signatura, que implicaban ciertamente vigilancia sobre otros tribunales, eran actividades sometidas a limitaciones de petición de parte, aunque también pudieran ser promovidas, según los casos -y en ellos se contara con la conveniente legitimación-, por el Promotor de Justicia o por el Defensor del Vínculo; también se hallaban sometidas a limitaciones impuestas por la sujeción a determinadas exigencias legales, que no dejaban de ser restrictivas en sus naturalezas respectivas y en los supuestos en que solían ejercitarse.

No dejamos de pensar, a un mismo tiempo, sin embargo, que tales limitaciones eran las propias de la vigilancia judicial, pues una actuación

de vigilancia carente de condicionamientos y no sometida a estrictos requisitos legales amenazaría a la debida administración de la justicia. Esta perdería prácticamente esa nota de independencia, inseparablemente unida al ejercicio de la *potestas iudicialis*, tal como ha de ser servida por los tribunales de justicia. En estos han de coincidir, en todo momento, el concepto de jerarquía judicial, que se expresa existencialmente por la vía de los recursos de efecto devolutivo, y el concepto de independencia, que salva el criterio concreto de justicia en cada caso y que ha de ser atribuido sin interferencias a cada órgano judicial, en cualquier grado que pronuncie su sentencia. Sólo a quien ha de dictar cada sentencia es al que se ha de imputar la responsabilidad de su decisión según la apreciación que en conciencia haga de la prueba aportada, sin perjuicio de lo que la ley pueda indicarle respecto al valor de alguno de esos medios probatorios (cfr. c. 1869 §§ 2 y 3). Por estas razones, esa vigilancia de la que se hacía mención por el art. 105 de REU era preferible que se realizara a través del control de legalidad que los recursos proporciona, evitándose así una actividad inspectora, que invadiera competencias que merecían ser respetadas en aras de una justicia independiente.

2. *La vigilancia sobre las conductas procesales*

También el propio c. 1603 § 1, en sus números 1º y 2º respectivamente -violación de secreto y daños inferidos por Auditores de la Rota como consecuencia de haber éstos realizado actos nulos o injustos, así como la excepción de sospecha contra algún Auditor de la Rota-, proporcionaba al Tribunal de la Signatura ocasiones para una vigilancia adecuada de la recta administración de la justicia, que resultaba de este modo ejercitada en máximos niveles de jerarquía judicial. Se trataba de vigilancia no sobre las decisiones judiciales mismas, sino sobre las conductas de los propios Auditores, cuyo oficio eclesiástico consiste en administrar rectamente la justicia. Se trataba, en estos casos, de emitir juicio sobre responsabilidades adquiridas por actos injustos cometidos por los Auditores rotales, buscándose la reparación de la justicia mal administrada; o se trataba de evitar que, de quien se teme que no sea imparcial (cfr. c. 1613) a la hora de dictar su resolución judicial, llegue a proceder como juez y encuentre ocasión que facilite que la administración

de justicia carezca de independencia. Desde ambos puntos de vista el Supremo Tribunal velaba también porque la administración de justicia fuera ejercida rectamente. En definitiva, se trataba de una trasposición de preceptos procesales generales, relativos a todos los jueces (cfr. cc. 1623, 1625 y 1613-1618), a los Auditores de la Rota, y además formulando una asignación concreta de competencia a favor del Tribunal de la Signatura Apostólica.

3. *Otros aspectos de la vigilancia en cuanto significa control*

Uno de los aspectos más interesantes de vigilancia de la recta administración de justicia por la Signatura resultaba de la actividad judicial que se desplegó por este mismo tribunal como consecuencia de lo que disponía el nº 5º del § 1 del c. 1603: recursos contra las sentencias de la Rota dictadas en causas matrimoniales cuando este tribunal rehusaba admitirlas a nuevo examen. En rigor se trataba de resolver una cuestión *de iure appellandi*, carente en el Código del 17 de regulación propia y aplicada específicamente a los decretos rotales que rechazaban la apelación por entender que había dos sentencias conformes (c. 1902, 1º). Se trataba de controlar que el mismo tribunal que dictó la segunda sentencia tuviera la última palabra sobre sus posibilidades de apelación.

Indudablemente, con este tipo de recursos, relativos a la posibilidad de nueva apelación, al no atribuirse la competencia a un nuevo turno rotal, sino trasladarla al Tribunal de la Signatura Apostólica, se estaba trasladando a éste una labor más de control sobre la recta administración de justicia, cuya más acabada tarea se producía sobre el Tribunal de la Rota, donde reside la instancia última.

El recurso contencioso-administrativo contra las decisiones del competente Dicasterio en el ejercicio de la potestad administrativa eclesiástica, por violación de Ley, regulado por el art. 106 de la Constitución REU era, por último, una ocasión más que se ofrecía al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para velar por una buena administración de la justicia en la Iglesia, que al menos, en este contexto concreto del citado art. 106, se trataba de la justicia que ha de ser observada por los órganos administrativos de la Sede Apostólica al realizar sus actos de buen gobierno. Tal rectitud dependía del ajuste a la Ley de esos actos admi-

nistrativos. Si no se ajustaban a la Ley, y se realizaban con violación de lo que en ella se disponía, el acto administrativo carecía de la rectitud necesaria que permitiera hacer factible el resultado de justicia que con él se pretendía; merecía, por tanto, que se estableciera, a este efecto, un control judicial por órgano que ofreciera las máximas garantías.

Ciertamente que este tipo de vigilancia por la Signatura Apostólica respondía más bien a lo que, en ocasiones anteriores, en sendos trabajos hemos nosotros mismos llamado «control judicial».

Hemos aplicado estos términos, en los dos trabajos ya publicados en esta misma Revista *Ius Canonicum*, referidos a la justicia administrativa primero, en cuanto «control judicial de la Administración Central de la Iglesia», mediante el recurso contencioso-administrativo ante la Signatura Apostólica; y en segundo lugar, como «control de la justicia de fondo de las sentencias firmes y definitivas» mediante el recurso extraordinario de la restitución *in integrum*.

Mas cabe ahora preguntarnos si esta función de control procesal es precisamente el ejercicio de la misión general de vigilancia que introdujo la norma del art. 105 de la *Regimini Ecclesiae Universae*; una función que posee la Signatura por razón de su oficio, «como es su deber» según la traducción oficiosa castellana de la Constitución Apostólica, *pro munere suo* como dice el texto latino. ¿Por este precepto de Paulo VI se añadió algo más que el antes descrito control de legalidad sobre la administración de la justicia, recaiga este control sobre el fondo, sea sobre la forma de las sentencias, sea sobre las conductas en pro de la imparcialidad de los jueces, o sobre las nuevas posibilidades que una sentencia tenía de ser apelada una vez más? Los términos *pro munere suo* parecen sugerir que esa función de vigilancia no iba más allá de la que se derivaba de las atribuciones de competencia que al Tribunal de la Signatura se otorgaban por disposición canónica. Por otra parte, no dejaría de ser reiterativo el citado art. 105 de la *Regimini* cuando por otro lado se nos volvía a recordar que la competencia de este Tribunal Supremo había de ejercerse con potestad ordinaria o delegada, según los casos, en aquellos asuntos que le han sido atribuidos por el Código de Derecho Canónico.

II. ALGUNAS HIPOTESIS ATIPICAS DE CONTROL DE LEGALIDAD BASADAS EN LA «POTESTAS INVIGILANDI»

En *Monitor Ecclesiasticus* fueron publicadas algunas sentencias (Cfr. 104 A. 1979, IV, pp. 404-409 y 410-415 respectivamente) de la Rota Romana, dictadas en causas de nulidad matrimonial y que le fueron encomendadas por el Tribunal de la Signatura Apostólica. Si tiene algún parecido esta comisión o encargo con alguna figura regulada en la Ley es con la hipótesis del c. 1603 § 2, si bien en estos casos no se ve que mediara libelo suplicatorio dirigido por los litigantes al Santo Padre; es decir, el caso de la delegación recibida por la Signatura si mediaba libelo suplicatorio para que juzgue la Rota Romana.

En una de las sentencias que citamos se declaró la inexistencia de la decisión confirmatoria de la nulidad dictada en segunda instancia y que fue pronunciada según lo prescrito para la apelación de la primera sentencia de nulidad matrimonial por el art. VIII del *Motu proprio* de Paulo VI, *Causas matrimoniales*, de 28 de Marzo de 1971 (AAS 63 [1971] 441 ss.). Se originó la cuestión, de la que llegó a decidir la Rota Romana por encargo de la Signatura, en virtud de un recurso contra la segunda decisión confirmatoria de la nulidad interpuesto ante el Tribunal de la Rota Romana, con base a nuevos y graves argumentos, siendo remitida la impugnación, como incidente de nulidad de sentencia, al Tribunal de la Signatura *ex potestate invigilandi super recta administratione* (art. 105 citado): formalmente la decisión impugnada carecía de una serie de requisitos para sostener su propia existencia, al estar privada de aquellos elementos de expresión necesarios que permitiera relacionarla de modo suficiente con la sentencia pronunciada en primer grado, y carecía también de las razones que fundaran la decisión.

En el otro caso, se declaró también la nulidad de la decisión de segunda instancia y, además, la de la sentencia dictada en primer grado, si bien el recurso se interpuso por la demandada directamente ante el propio Tribunal de la Signatura, el cual, reunido en Congreso ante el Cardenal Prefecto, decretó encargar de la pretendida resolución a la Sagrada Rota Romana, la cual se pronunció mediante sentencia interlocutoria: es decir, se resuelve por vía de incidente de nulidad de actuaciones y aunque se haga en las argumentaciones, para declarar esas nulidades, referencias a los antiguos cc. 1892 y 1894 -señalándose así las infracciones de ley

formal en que se había incurrido-, tales citas legales sólo dan noticia de la justificación de la nulidad de la sentencia impugnada, pero no que el procedimiento seguido para pretender la nulidad fuera el de *querela nullitatis*, en cuyo caso no hubiera correspondido la propia competencia a la Signatura Apostólica (vid. cc. 1895 y 1896), reducida a conocer estas quejas sólo cuando se interponen contra sentencias de la Rota Romana.

En ambas hipótesis se procedió ajustándose a las normas de un especial recurso de nulidad de actuaciones, de carácter extraordinario y excepcional, cuyo destinatario fue en definitiva el Tribunal de la Signatura Apostólica, procediendo éste *per saltum*, es decir, prescindiendo de otras posibles instancias que, con sujeción estricta a la norma canónica, hubieran podido originar distintas competencias. El Tribunal de la Rota Romana si decidió estos incidentes de nulidad de sentencias fue por encargo o comisión conferida por el Tribunal de la Signatura. La justificación fundamental para aceptar este Tribunal su competencia fue, en definitiva, en atención a la potestad *invigilandi super recta administratione iustitiae*, que le atribuyó el art. 105 de REU. El comportamiento que adoptó se inspiró, en cambio, en lo que disponía el c. 1603 § 2.

El Tribunal de la Signatura Apostólica ha procurado, en estos casos y en otros que también se han producido posteriormente, que se actuara contradictoriamente de modo correcto, remitiendo la cuestión planteada a un tribunal que ofreciera todas las garantías de justicia, como es el Tribunal de la Sagrada Rota Romana, y todas las garantías de que se seguiría con seguridad la contención, el contradictorio procesal. Sin embargo, la Signatura, al asumir ella misma la competencia, que luego conferirá a otro tribunal, no se sujetó estrictamente a la ley positiva canónica. Pesó en el Supremo Tribunal, a nuestro juicio, mas esa misión de vigilancia, propia de un órgano administrativo de la Sede Romana, que su función de órgano específico para la administración de justicia. Sin embargo, asumió la competencia para que se cuidara precisamente la recta administración de justicia en la Iglesia.

En rigor, en estos casos, no se obró según un modelo de control de legalidad preestablecido, sino que el Tribunal de la Signatura, ante las reclamaciones planteadas, denunciadoras de unas violaciones de ley procesal, flexibilizó la ley canónica para hacer posible su control de legalidad -que no contaba con un modo práctico de realizarse según la ley común- en virtud de su *potestas invigilandi* de la recta administración de justicia.

De este modo ofreció un remedio justo, aunque carente de peculiar regulación legal, para resolver unas situaciones jurídicas que se temía resultaran injustas, derivadas de una administración de justicia que no había procedido con la debida rectitud y cuyos viciosos resultados se hubieran visto llamados a perdurar por carecerse de un recurso de impugnación adecuado para el ejercicio de un legítimo control judicial de legalidad según las normas procesales del Código de 1917. Con razón Mons. Grocholewski, cuando se enfrenta con la organización de este Supremo Tribunal de la Iglesia y las funciones que por Ley se le atribuyen, sostiene que más que de dos Secciones, son tres las que componen dicho tribunal.

III. UNIDAD Y DIVERSIDAD DE COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA SIGNATURA APOSTOLICA

Una Sección de justicia, otra contenciosa administrativa, y otra dirigida a velar por la recta administración de la Justicia en la Iglesia. En un volumen, resultado de la colaboración de varios autores, que se ha publicado bajo el título «La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus», Mons. Grocholewski, Secretario del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, en su trabajo titulado *I Tribunali*, vuelve a sostener que la Signatura es Tribunal sólo en parte, ya que la mitad de su trabajo lo desenvuelve no como Tribunal sino como órgano administrativo relativo a la actividad judicial en la Iglesia; viniendo a ser en parte, por ello, siguiendo la terminología canonística, una «Congregación» para la justicia, pues sus actividades a este respecto son semejantes a las del Ministerio de Justicia en los ordenamientos estatales. De esta manera estima que, más adecuadamente, por la literatura canonista se han propuesto para la Signatura Apostólica el nombre de *Supremum Justitiae Dicasterium*, mientras que para el Tribunal de la Rota el de *Tribunal Apostolicum Apellationis*.

En lo mismo insiste cuando se detiene a considerar quiénes son los jueces que componen la Signatura: algunos cardenales nombrados por el Romano Pontífice, de los que uno de ellos es designado Prefecto por el propio Romano Pontífice (cfr. c. 1602 y art. 104 REU). También por nuestra parte, a raíz de promulgarse la Constitución Apostólica *Regimini*, sostuvimos que este Tribunal, por su composición, «no es un Tribunal

propiamente de Justicia ni en su Primera ni en su Segunda Sección», pues no cabe decir, «desde el punto de vista de los Jueces que integran el Tribunal ..., que su composición lo hace independiente de la Administración». (*El control judicial del Gobierno Central de la Iglesia*, «Ius Canonicum», 1968, pp. 351-357). El derecho mismo, que había proclamado el c. 1605 § 1, de que sus decisiones no tenían que ser razonadas, ni con base a los hechos ni al derecho, ilustran de que no estábamos en presencia de un tribunal propiamente judicial, si bien este precepto no aparezca hoy recogido ni por el Código de Juan Pablo II ni por la Constitución Apostólica *Pastor Bonus*. Asimismo, tanto el reciente Código como la última Constitución Apostólica tampoco mencionan las Secciones de este tribunal, con lo que parece se intenta acentuar su unidad. Sin embargo, independientemente de lo que legislativa o reglamentariamente se regule sobre la diversificación funcional interna de la Signatura, al mantenerse, en la nueva legislación canónica, las varias competencias, le lleva a sostener a Mons. Grochowski que, junto a la Primera Sección, más parecida a las Cortes de Casación civiles, existe la Segunda, paragonable al Consejo de Estado; mientras la Tercera Sección se presenta no como tribunal sino -vuelve a repetir- como supremo órgano administrativo relativo a la actividad judicial, esto es, como una a manera de «Congregación de la Justicia», semejante a los Ministerios de Justicia en los ordenamientos estatales.

IV. LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LA SIGNATURA EN LA LEGISLACION CANONICA ULTIMA

Mas veamos si la Constitución Apostólica de SS. Juan Pablo II, *Pastor Bonus*, contradice de algún modo lo que dejamos ya sentado en relación con las competencias atribuidas según la antigua Constitución *Regimini Ecclesiae Universae*, y al mismo tiempo si contiene alguna novedad que influya en lo que el Código de 1983 estableció sobre la Signatura, y si las normas de competencia hasta entonces vigentes quedaron modificadas de algún modo por el nuevo cuerpo legislativo.

1. *En la nueva regulación codicial*

El nuevo Código ha reducido a un sólo canon -el 1445- el tratamiento legislativo de la Signatura. No hace distinción de Secciones, pero de los distintos apartados del canon se advierte que se conserva ese triple aspecto de atribución de competencias, judicial propiamente dicha, contencioso-administrativa y propiamente administrativa.

El control de legalidad sobre la actividad de los Tribunales eclesiásticos sigue ejerciéndolo sobre las sentencias rotales, y tal como se expresa en este n. 1º del c. 1445 § 1, se han de entender comprendidos también en él, a mi juicio, las sentencias del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid: control que se producirá mediante los recursos de restitución *in integrum* y la querrela de nulidad contra estas sentencias rotales. Será, pues, un control condicionado por la iniciativa de parte y limitado a los supuestos legales que el nuevo Código contempla, respecto a la restitución en el c. 1645, y respecto a la nulidad por razones de forma en los cc. 1620 y 1622.

También en el mismo nº 1º del c. 1445 § 1 se afirma su competencia para juzgar *alios recursus contra sentencias rotales*: no se trata sólo de los recursos de las sentencias sobre el estado de las personas que la Rota Romana se niegue a admitir a nuevo examen, especialmente contemplados en el nuevo c. 1445 § 1, 2º. Parece que el legislador intenta manifestarse conscientemente abierto en su previsión, y procura abarcar cualquier hipótesis de planteamiento procesal por vía de recurso no tipificado contra sentencia rotal. Un precepto como el que consideramos no estaba ni en el Código de 1917 ni en la *Regimini*. Cabría pensar que en las palabras *alios recursus* queda incluida la *nova propositio*, también llamada en España con los términos juicio de revisión, regulada por el c. 1644 en causas sobre el estado de las personas con base a nuevas y graves pruebas o argumentos. En tal caso cabría decidir, que a este sólo objeto, en las causas sobre el estado de las personas, el llamado por el c. 1644 *Tribunal apellationis*, si se trata de una sentencia rotal precedente *firme*, sería el Tribunal de la Signatura. No conozco si este problema se ha planteado y cómo haya sido resuelto. En la bibliografía canónica no he visto al menos antecedente. El problema, sin embargo, entendemos que ha desaparecido después de la promulgación de *Pastor Bonus*.

Se ha eliminado, en cambio, la mención expresa de las competencias sobre violación de secreto y daños inferidos por los Auditores de la Rota por acto nulo o injusto. Quizá también ésto se deba a esos términos *alios recursos*, como comprensivos de reclamaciones que en general pudieran dirigirse contra jueces rotales por responsabilidades derivadas del incumplimiento de deberes fundamentales que infrinjan la ley canónica. Sin embargo, el texto del n. 3º del c. 1445 § 1 da motivos para entender que, por el contrario, este tipo de responsabilidades de los jueces rotales -como los designa *Pastor Bonus* a los antiguos Auditores- se advierte que discurre no por el n. 1º. sino por el 3º citado del c. 1445 § 1: *propter acta in exercitio ipsorum muneris*. El precepto ahora resulta más amplio que el del antiguo c. 1603 § 1, 1º. Se mantiene, en cambio, la misma competencia que antes se tenía para la excepción de sospecha de los jueces rotales.

Por último, en el art. 1445 § 1, 4º se conserva el mismo precepto del Código anterior, si bien adaptado a la letra del nuevo, respecto a la competencia para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de justicia que tengan distinto tribunal al que acudir en apelación (cfr. también c. 1416).

El control de legalidad de la actividad procedente del ejercicio de la potestad administrativa no quedó -justo es reconocerlo- bien perfilado en el c. 1445 § 2. Sin embargo, este tema queda marginado por nosotros en razón al objeto al que se extiende nuestras presentes consideraciones.

Respecto a lo que comprende el c. 1445 § 3 -lo que suele calificar Grocholewski de «Congregación de la Justicia»-, en su n. 3º se usan nuevas palabras, que exceden al término *curat* de la *Regimini*, otorgándose competencias, para la erección de tribunales de primera y segunda instancia supradiocesanos, extensivas no sólo al control por la vía de su erección, sino *-promovere et approbare-* por la de llevar incluso la iniciativa y el apoyo para crearlos. Esta actividad no es, pues, propiamente de control, como tampoco lo es el precepto del n. 2º del mismo canon, pues prorrogar las competencias de los tribunales no viene a significar, en el contexto en que el precepto canónico lo establece, sino un medio expeditivo para el reparto de las cuestiones que se planteen ante los tribunales, haciendo asignaciones específicas de competencia en donde por ley no las había. Quizá esas comisiones o encargos hechos por la Signatura a la Rota Romana, que se descubren en las sentencias que antes comentamos,

desde el nuevo Código pueden sentirse amparadas por la competencia para prorrogar que el Código de 1983 introduce en § 3, n. 2º, pues el § 2 del c. 1444, como ya hizo el c. 1559 § 2 del Código de 1917, prescinde de la mediación del Tribunal de la Signatura Apostólica.

Por último, nada nuevo se añade sobre la vigilancia de la recta administración de justicia ya establecida por el art. 105 de la *Regimini*. Se ha limitado a recoger la generalidad de este precepto, sin otras determinaciones, si bien se le haya hecho un añadido al precepto, que puede tener relación con la recta administración de justicia, pero que no es del todo coherente con ella: *et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere*. ¿Se refiere únicamente a los que actúan en el Tribunal de la Signatura? Podría haberse hecho referencia más general a todos los que actúan en el Tribunal de la Signatura en los diversos oficios del mismo, en cuyo caso el precepto no resultaría peyorativo para los Patronos de causas, que por otra parte ya cuentan con propios preceptos disciplinarios en los cc. 1487-1489, que al mismo tiempo señalan la autoridad competente que ha de adoptar esas medidas sancionadoras administrativas. El precepto, a nuestro juicio, hubiera sido más acertado si hubiera atribuido la más alta competencia administrativa, dentro del recurso jerárquico, al Tribunal de la Signatura Apostólica en relación con cualquier medida disciplinaria que un juez o un Obispo hubieran impuesto a un abogado o procurador que no actuaran rectamente en el ejercicio de su oficio al servicio no sólo de los intereses de parte, sino en todo caso del interés supremo de la Justicia. No ignoro que el precepto hubiera planteado el conflicto caso de recurso contencioso-administrativo, pero quizá la mejor definición, y consiguiente distinción respecto a las dos Secciones del Tribunal en el propio Código, hubiera facilitado la solución, sin grandes violencias, de este problema.

2. La novísima regulación de «Pastor Bonus»

a. Control de legalidad

Independientemente de que ha perfilado con más precisión, en su art. 123, el objeto y requisitos del control de legalidad de los actos administrativos canónicos por el recurso contencioso-administrativo, se sigue manteniendo el control de legalidad de las sentencias judiciales por los re-

cursos de *restitutio in integrum* y por el de la querrela de nulidad de la sentencia. Sigue siendo, pues, un control de legalidad sólo de las sentencias de la Rota Romana, un control por tanto limitado y condicionado según vimos anteriormente. Pero así como el c. 1445 § 1, 1º se refería en general a las sentencias rotales, lo que en hipótesis permitía someter a este control incluso a las sentencias de la Rota española, el art. 122, 1 de *Pastor Bonus* expresamente hace mención única de «las sentencias de la Rota Romana».

En el n. 2º del art. 122 se controla por el recurso propio del *ius appellandi* la negativa de la Rota Romana a la admisión de un recurso que permita someter a nueva consideración y estudio lo ya decidido por la Rota Romana en las causas sobre el estado de las personas. Puede decirse que este precepto es coincidente con el n. 2º del c. 1445 § 1, 1º, del Código del 83.

En el n. 3º del art. 122 se vuelve a repetir el nuevo c. 1445 § 1, 3º, sobre excepción de sospecha y otras causas contra los hoy llamados «Jueces de la Rota Romana».

Por último, en el n. 4º del art. 122 se mantiene la competencia para resolver los conflictos de competencia entre tribunales que no dependan del mismo tribunal de apelación, con lo que su precepto es coincidente con el nuevo c. 1445 § 1, 4º.

En rigor, sólo hay una modificación a la última reforma codicial: la eliminación de que pueda juzgar (c. 1445 § 1, 1º) *alios recursus contra sententias rotales*. No se comprende por qué lo que había quedado abierto, como posibilidad hipotética de controlar la legalidad de todas las sentencias rotales, fuera de los estrechos cauces de la *querela nullitatis* y de la *restitutio in integrum*, se haya eliminado tan pronto de la ley canónica, sin pasar por una experiencia que hubiera podido ser conveniente. ¿Un deseo quizá de mayor sometimiento a los recursos que con carácter general se regulan en la Ley procesal canónica? No me lo parece cuando en el primer artículo de *Pastor Bonus*, dedicado al Supremo Tribunal de la Signatura -el art. 121-, se proclama con carácter general una afirmación de competencia que puede ser amplísima y hasta excluyente de toda garantía jurídica procesal: además de ejercer la función de Supremo Tribunal, «se ocupa de la recta administración de la justicia en la Iglesia»

Por último, el art. 124 de *Pastor Bonus* vuelve a repetir las competencias -propiamente administrativas- del c. 1445 § 3, aunque con la

modificación de que la prórroga de la competencia de su n. 3º viene restringida a «los Tribunales de grado inferior», con lo que parece queda excluida la prórroga de competencia a favor del Tribunal de Rota Romana. El art. 124 § 3, 2º, en cambio, señala la competencia de la Signatura para juzgar acerca de «las peticiones formuladas a la Sede Apostólica para obtener el traslado de la causa a la Rota Romana». Esta norma no hubiera sido necesaria si se hubiera mantenido en *Pastor Bonus* el mismo precepto de prórroga de competencia que establecía el Código de 1983 en su c. 1445 § 3, 2º; pero quizá se ha querido patentizar ese derecho que tiene todo fiel de acudir al Romano Pontífice como juez supremo de toda la Iglesia y el poder de éste para avocar cualquier asunto y dictar también sentencia mediante los tribunales ordinarios de la Sede Apostólica (cfr. c. 1444 § 2).

b. *La función de cuidar de la recta administración de justicia, diferenciada del control de legalidad*

Resulta difícil predecir cómo se ejercerá en el futuro la función de cuidar de la recta administración de la justicia en la Iglesia por el Tribunal de la Signatura. Habrá que esperar a la Ley propia del Tribunal, cuya ley viene reconocida en el art. 125 de *Pastor Bonus*. Las normas de procedimiento que se dicten también esperamos que puedan ilustrarnos respecto a este tema, que adquiere en *Pastor Bonus* un carácter principal y programático, máxime cuando en la *Regimini* se presentaba esta función dentro de una enumeración de facultades como un deber de vigilancia, sin que se le añada nota de algún relieve; y en el Código de 1983, por el contrario, se hace mención de esta competencia en el c. 1445 § 3, 1ª, como deber primero y destacado de vigilancia que va unido al precepto -que pudiera entenderse como aspecto concreto de ese deber de vigilancia- que autoriza proceder contra abogados y procuradores si fuera necesario.

¿Ese deber que le lleva a la Signatura a ocuparse de la recta administración de justicia en la Iglesia podría convertirse en un control efectivo de la legalidad de las sentencias de los Tribunales eclesiásticos, para lo que podría servirse de inspecciones, estudios, consultas, juicios, revocaciones *ex officio*, etc.? Pensamos en principio que no nos moveremos en tal incertidumbre, pero estimamos muy conveniente, por no decir necesario, que pronto se nos ilustre acerca del alcance de esa función que se atribuye

a la Signatura con carácter tan general y programático, así como de cuáles serán los medios jurídicos de los que habrá de servirse el Supremo Tribunal en esta tarea. Tal preocupación por la recta administración de la justicia ha de evitarse, a nuestro juicio, que pase a convertirse en ocasión propicia para actuar según el arbitrio administrativo, con el peligro que podría suponer para la independencia y serenidad con que han de operar los Tribunales de justicia.

En conclusión, pienso que *de iure condendo* debe sostenerse siempre que el control de legalidad, en cuanto al modo de proceder y a las cuestiones de derecho material resueltas por los Tribunales de instancia en la Iglesia, merece que se realice por las vías garantísticas de los recursos judiciales regulados en la Ley. Es lo que se atribuye al Tribunal de la Signatura respecto a las decisiones de la Rota Romana en los nn. 1º y 2º del art. 122 de *Pastor Bonus*. También en lo que respecta al *ius appellandi* de las sentencias rotales. Esta tarea debe quedar bien diferenciada de la función relativa al cuidado y vigilancia de la recta administración de justicia, que es una función especialmente administrativa. Esta no debe ser confundida con el control de legalidad, sino que ha de ser actividad que recaiga sobre conductas de jueces, abogados y procuradores, pero también sobre todos aquellos que forman parte de las Curias judiciales en cualquiera de sus instancias. Es en este campo administrativo donde se producirán inspecciones, vigilancias, visitas, recepción de denuncias, expedientes disciplinarios, etc.

Aunque se desee por el legislador presentar al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de un modo unitario, estimamos que esta actividad administrativa de vigilancia debería quedar no obstante bien diferenciada y ser atribuída en especial a determinados miembros del Supremo Tribunal, que se constituirían como órgano administrativo a estos efectos, sometida su actividad a normas propias del procedimiento administrativo. Si como Tribunal de justicia, al juzgar acerca de la legalidad de las actuaciones de otros tribunales de la Iglesia, advirtiera irregularidades en las conductas de los que actuaron con oficio eclesiástico o como Patronos de parte en las causas, el Tribunal de justicia no deberá emitir juicio sobre dichas irregularidades, sino que sería deseable que las ponga en conocimiento del órgano administrativo, constituído a dicho fin en el seno del propio Tribunal, para que obre en consecuencia. Por vía reglamentaria

estimo que aún caben soluciones normativas que terminen sentando con claridad tal diferenciación.

No se interprete esta postura como un intento de mantener por nuestra parte una teórica pureza jurídica, que sabemos no es bien aceptada hoy en ambientes canónicos, sino que ha de verse como muestra de una convicción profunda, cuyo fundamento reside en que se perjudica la verdadera y recta administración de justicia cuando no se cuida en el ordenamiento que los tribunales no sólo sean realmente independientes, sino que se sientan además con esa independencia a la hora de dictar sus sentencias: sólo dependientes en conciencia de la Ley, de las peticiones de parte, de los hechos averados por su prueba. Entonces es cuando puede hablarse de auténticos tribunales de justicia. Ello no está reñido, ni contradice, sino que, al contrario, lo exige, con un sistema que acentúe las responsabilidades de aquellas personas que lo componen o que actúan ante ellos profesionalmente.